

CRÓNICAS DE CUIDADO Y RESISTENCIA

—



Crónicas de cuidado y resistencia



Ilustración: Yavheni de León

Por: Agencia Ocote

Son, en principio, tres crónicas periodísticas que abordan la pandemia de COVID-19 con perspectiva de género. Surgen de una iniciativa del Centro Cultural de España en Guatemala, que buscaba exponer la realidad de las mujeres del norte de Centro América a través del periodismo narrativo desde la mirada de mujeres periodistas.

Así surge “Crónicas de cuidado y resistencia”, que refuerza la alianza estratégica de Agencia Ocote (Guatemala) –como coordinadora editorial–, ContraCorriente (Honduras) y Alharaca (El Salvador); y los Centros Culturales de España en Tegucigalpa (Honduras) y El Salvador. Es esta una forma de potenciar el periodismo que recurre a las herramientas de la literatura para contar la realidad y que pretende mostrar cómo mujeres del norte de Centroamérica se han enfrentado a esta crisis global, pero que siguen resistiendo a las violencias sistémicas.

En estas crónicas, sus autoras exponen cómo el trabajo desde el cuidado y desde las iniciativas organizativas y comunitarias juegan un papel crucial.

La publicación de estas crónicas se realiza entre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre y durante los 16 días de activismo contra la violencia de género.

El formato: la crónica, narrar desde la literatura y el periodismo

Juan Villoro llama a la crónica “el ornitorrinco”: “A semejanza del ornitorrinco, la crónica se beneficia de muchos géneros literarios a condición de no ser ninguno de ellos. Tiene algo del relato, del reportaje, del ensayo, del libro de memorias, incluso del teatro por el manejo de los diálogos y las declaraciones, pero es diferente. Entonces, así como el ornitorrinco parece muchos animales posibles, y resulta genuino como un animal distinto, la crónica, que también se asemeja a muchos géneros, es en realidad un género propio”.

Es, pues, un género periodístico que utiliza la narración, la descripción, que permite contar los detalles y transportar a la persona que lee

al lugar donde estuvo la persona que escribe. Con la crónica se crean escenarios, que son recorridos por quien lee; las fuentes dejan de serlo, para convertirse en personajes o protagonistas. Con el periodismo narrativo es posible se ver, oler, escuchar... sentir. Los textos acercan.

En ocasiones, la crónica no busca lo extraordinario. Se interesa también por lo cotidiano. Eso es lo que buscamos mostrar con “Crónicas de cuidado y resistencia”: cómo lo común, “lo normal”, lo que estas mujeres y tantas otras en el norte de Centroamérica viven cada día, merece la pena ser contado.

El cuidado

Los hombres en lo público, las mujeres en lo privado. Esto es lo que la división sexual del trabajo nos ha enseñado históricamente. En diferentes sociedades, pero en un mismo sistema desigual, a las mujeres se les ha relegado al trabajo en casa, al trabajo de los cuidados. Un empleo no remunerado que en muchas ocasiones compaginan con otro fuera del hogar.

Estos textos son una reivindicación de esos cuidados. De ese trabajo no pagado, o mal pagado, que las mujeres hacen no solo con sus hijas e hijos, o con sus familiares dependientes. También con compañeras de trabajo, con colegas de resistencia, con mujeres que necesitan ayuda desesperadamente y no la encuentran en ningún otro lugar, con sus comunidades.

La resistencia y la organización

Centroamérica, toda América Latina, es sinónimo de resistencia, de organización. Las mujeres han tenido históricamente un papel crucial en estas luchas, generalmente opacado, olvidado y no reconocido.

Las mujeres campesinas que protestan por recuperar sus tierras; las mujeres indígenas que defienden sus territorios, el ambiente, sus culturas; las trabajadoras que piden mejores condiciones laborales; las feministas que exigen derechos sexuales y reproductivos.

Estos textos también buscan mostrar cómo la organización es la base desde la que las mujeres se sostienen, desde la que resisten y desde la que reclaman derechos humanos, no solo para ellas, sino para toda la ciudadanía.

Las historias

En Guatemala, Agencia Ocote habla de cómo un centro de atención a mujeres se convirtió en un refugio a distancia en un momento en el que las caricias y los abrazos son lo más nece-

sario y también lo más prohibido. En Honduras, Contracorriente cuenta la historia de tres enfermeras que trabajan y resisten en medio de una pandemia mundial, que las pone en peligro a ellas y a sus familias, con un Gobierno que no responde a la ciudadanía. En El Salvador, Alharaca nos traslada a un campamento que extrabajadoras de una maquila levantaron para protestar contra un despido injustificado y desde el que juntas se dan fuerzas para no desfallecer, después de varios meses de lucha.

Las tres historias nos hablan de cómo las mujeres logran organizarse, con todo en contra, para apoyarse entre ellas. De cómo han construido espacios de sanación y de acompañamiento en medio de una crisis. De cómo el cuidado y la organización son la base de su resistencia.

Así vive una mujer que protesta contra una maquila en pandemia



Ilustración: Yavheni de León

Por: Marcela Trejo • Alharaca

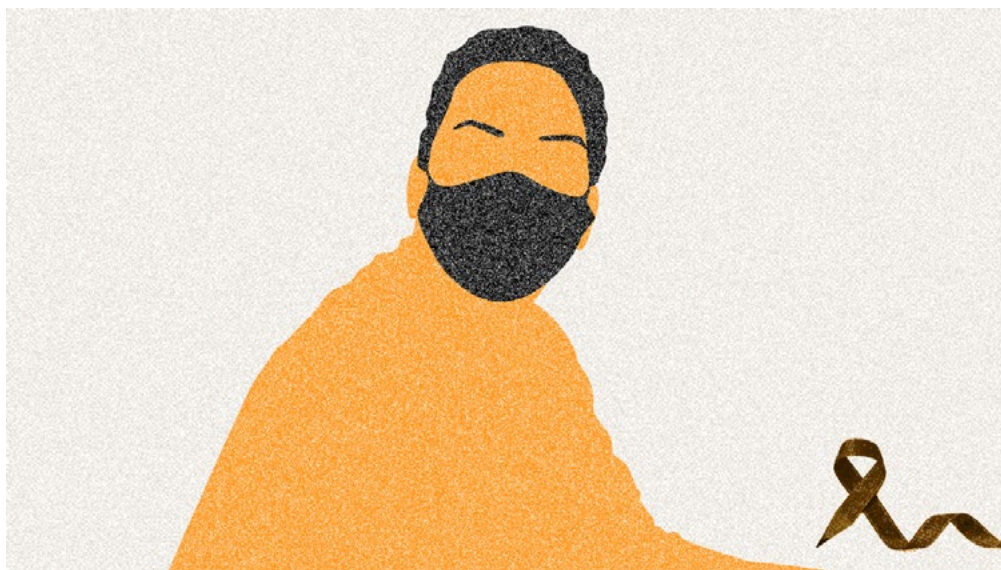
Concepción Cruz es una de las 113 mujeres que protestan contra Industrias Florenzi, la maquila que las despidió sin justificación. No es la primera vez que lidera una protesta contra una maquila. Pero sí es la primera vez que debe de hacerlo en medio de una crisis sanitaria como la de la pandemia por COVID-19.

Cerca de la zona franca de San Bartolo, al este de San Salvador, una mujer de 55 años se despierta todos los días a las cuatro de la mañana. Se queda tumbada sobre su cama, la parte de abajo de un camarote, en una pequeña habitación que comparte con su hermana. En esta casa de dos habitaciones viven ellas dos con otro hermano. La mujer espera acostada a tener los ánimos suficientes para levantarse y comenzar con la rutina del día.

Se asea, ordena la casa, prepara y empaca un trozo de queso y una botella con agua. A las siete de la mañana, sale por la puerta con su mascarilla puesta hacia la parada del autobús para esperar una de las dos rutas que debe tomar cada día. Tardará aproximadamente una hora en llegar a su destino.

La mujer se llama Concepción Cruz. La llaman Conchi. Ya no va al trabajo. Esta mañana, igual que cada mañana desde hace 256 días, Conchi viaja a un campamento de protesta que levantó con otras 112 mujeres en contra de la empresa maquiladora para la que trabajaban.

El campamento está en el municipio de Soyapango, a seis kilómetros de su casa. A mediados de marzo, la maquila Florenzi S.A. de C.V. suspendió los contratos de 210 trabajadores y trabajadoras sin justificación. Ella es miembro del Sindicato General de Costureras, una agrupación que forma parte de la Mesa Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Maquila. Conchi habla con soltura. Recuerda con memoria fotográfica fechas, nombres, y sucesos de los últimos meses.



*Ilustración:
Maritza Ponciano*

El 21 de junio, contrajo COVID-19. Su hermano la contagió a ella y a su hermana. Cuando quiso ir a consulta médica y hacerse una prueba, no pudo. La maquila donde trabajaba no había pagado su cotización al Seguro Social. Ir a un hospital público tampoco le parecía una opción porque el sistema nacional de salud estaba colapsado. Las salas de espera no daban abasto para la cantidad de personas que asistían a

consultas médicas. La pandemia por COVID-19 solo vino a empeorar la situación crítica en que ya se encontraban los hospitales y unidades de salud. Conchi temía que su enfermedad se agravase en uno de esos centros y, en el peor de los casos, morir internada ahí.

Estuvo ocho días enferma. Lo supo, porque comenzó a padecer de temperatura alta, dolor

de huesos, sensación de presión en el pecho, tos, pérdida de apetito y de paladar. Durante dos días no pudo ni abrir los ojos por el dolor. Su hermana, su hermano y ella tuvieron que mitigar los síntomas con remedios naturales. Aliviaron la fiebre con miel de abeja, jengibre, eucalipto, zacate de limón y té de manzanilla. Se cuidaron entre los tres.

En esa semana, Conchi no dejó de comunicarse por WhatsApp con sus demás compañeras de la maquila. Algunas ya habían comenzado a sospechar que la empresa iba a cerrar definitivamente. Habían pasado ya tres meses en los que Florenzi S.A. de C.V. no les daba ninguna respuesta sobre su situación. Además, Roberto Pineda, el dueño de la maquila, falleció justo en esos días.

Unos días después, el 1 de julio, la empresa les comunicó que no volverían a abrir. Recibieron un mensaje de WhatsApp de la encargada de recursos humanos. Sin tiempo que perder, Conchi, que todavía se recuperaba de los síntomas del COVID-19, y otras veinte mujeres se dirigieron a la maquila para hablar con sus superiores.

Al llegar, la empresa en la que había trabajado durante diez años cosiendo retazos de tela, le ofreció a cambio de un pasivo laboral de 7 mil dólares una máquina de coser devaluada que costaría unos 75 dólares.

Desde diciembre de 2019 la empresa había dejado de pagar AFP (Administradoras de Fondo de Pensiones) y el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS). Cerraron operaciones en marzo y en julio despidieron a sus trabajadoras. Cuando las echaron, las trabajadoras presentaron una medida cautelar en un juzgado. Hoy todavía esperan una respuesta. Las denuncias que plantearon en el Ministerio de Trabajo tam-

poco fueron atendidas. En una declaración pública, el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, se desligó del proceso aduciendo que ahora ya se trataba de un caso judicial que no competía a sus funciones.

Mientras no tengan una respuesta del juzgado, no se van a ir de la maquila. Ni por las noches. No la han abandonado cuando los policías han intentado desalojarlas, ni cuando el transporte colectivo se paralizó y la movilidad en las calles estuvo restringida por la pandemia.

Desde julio no volvieron a saber nada más de sus empleadores.

Esta mañana Conchi está tumbada sobre su cama. Son las seis, pero lleva despierta desde las cuatro. Piensa en voz alta cómo será su día. Llegará al campamento, máximo, a las ocho y media de la mañana. Las mujeres de la protesta han recibido una donación de frijoles frescos de parte de algunas personas que se solidarizaron con su lucha. Con ellos harán sopa.

—Hasta ahorita solo hasta ahí tenemos planificado, hasta el almuerzo. Anoche dejé algo de agua para lavar los trastes. Agarré agua llovida —dice y después calla.

Hoy Conchi llega a las ocho y media al campamento. El campamento está ubicado en la ace-ra frente a la maquila. Las mujeres se protegen del sol con un toldo que han conseguido por medio de algunos conocidos. Lo primero que hace es verificar que todo está en orden. Llega bien arreglada, aunque no tardó más de media hora en hacerlo. Se ha puesto pulseras, aretes y tiene su cabello colacho suelto y ordenado. Sus demás compañeras le comentan lo bien que se ve. Ella no responde.

Supervisa a la cocinera designada. Normalmente, si tiene que preparar tortillas, las prepara. Si no, sale en busca de ramas caídas o trozos de madera desechados en los alrededores. Hay que mantener abastecida de suficiente leña la cocina donde preparan la comida.

El resto de la tarde la pasará sentada en una silla de plástico, platicando con sus demás compañeras. Llamará a sus papás y conversará con ellos por una hora. Antes de irse, esperará la cena que vendrán a dejarles. Son cuatro platos de arroz con frijoles, crema, huevo, queso y pan que una de las empresas que utiliza las instalaciones de maquila para guardar material ha acordado darles.

Hoy también está pendiente de los turnos de las mujeres que pasarán la noche haciendo guardia en la protesta. Es ella quien organiza quiénes irán en cada grupo de vigilia. Procura que las personas se sientan cómodas con quienes se les asigna de compañeros, que no las dejen con quienes no simpatizan o no son amigas.

Dice que con la gente nunca se puede quedar bien, pero lo intenta. Trata de respetar lo que las demás quieren o no quieren. Esto le ha creado roces con otras de las dirigentes del grupo, que a veces juzgan su conducta. Dicen que es permisiva, complaciente. Su respuesta es que, más bien, sabe leer las necesidades de las personas, las respeta, y las cuida.

Conchi invierte la mayor parte de su presupuesto en la protesta. Gasta 50 centavos en el pasaje para llegar desde su casa. Cuando no hay agua en el campamento y tiene dinero, invierte cinco o diez dólares y compra botellas de agua potable. Ella no lo cuenta con resignación, sino con alivio. Cuidar de sus compañeras de protesta le ha permitido mantenerse ocupada

en una situación crítica en El Salvador y en su vida: en pandemia, sin trabajo y en resistencia. Ve esta manifestación pacífica como una forma de denunciar las injusticias que han vivido, con la tranquilidad de que las autoridades las van a respetar. De que no las van a agredir. Por eso se sintió decepcionada cuando tuvieron que organizar acciones de choque para llamar la atención de una empresa y de un Estado que las dejaron en el abandono.

La primera vez que participó en la toma de una calle pasó mucho miedo, pero no veían otra opción. Fue el 10 de agosto. Llevaban cinco meses de protestas que no eran escuchadas. Cuando vio a los policías con armas en la mano se asustó. Algunos detectives que llegaron en las patrullas interrogan a las mujeres. Ellas los reconocieron por sus característicos pasamontañas. Conchi no sabe muy bien por qué las cuestionaron ni de parte de quién lo hicieron. Les preguntaron de dónde venían, quiénes eran. Respondieron sin saber cómo sería utilizada esa información.

Luego de esta protesta y solo en los últimos tres meses, Conchi ha formado parte de al menos seis tomas de calles. Su tarea es encargarse de que las personas cubran un perímetro de la vía suficiente como para que los automóviles no puedan circular sobre el tramo de calle tomado. También procura que las personas que sostienen las mantas se alternen para que puedan descansar. Sobre las lonas están pintadas consignas políticas, caricaturas del empresario al que denuncian y también del actual ministro de Trabajo, Rolando Castro.

—A veces, muchas de nosotras en nuestras casas solo conseguimos para los pasajes. Es más difícil para las compañeras que tienen esposos

porque no les dan dinero. Les dicen “¿qué vas a hacer? ¡A perder el tiempo vas!”.

Para Conchi es decepcionante que los esposos de sus compañeras sean los primeros que desincentiven su lucha. Debería de ser más fácil para las que tienen una pareja llevar los gastos de la casa y hacer una protesta. Pero no es así. Para ellas es más complicado porque algunas no tienen ingresos o, si los tienen, sus compañeros los controlan. No es el caso de Conchi, pero eso no la excluye de tener dificultades económicas.

Ella tiene un ingreso mensual de 50 dólares que proviene del alquiler de una casa que compró, a cuatro cuadras de donde vive. De esos 50 dólares, 25 debe utilizarlos para pagar un préstamo. El resto es para comprar comida.

El día de su primera toma, el tráfico del Bulevar del Ejército quedó paralizado por varias horas. Es una de las principales vías del Área Metropolitana de San Salvador y cualquier bloqueo genera embotellamientos que paralizan el tráfico hacia la ciudad.

El ruido de los cláxones de los vehículos detenidos hacía eco por toda el área. A pesar de que la protesta está liderada y organizada por mujeres, esa mañana los policías solo le dirigían la palabra y le daban órdenes a los pocos hombres que forman parte de ella: “¿A qué hora van a terminar?” “¿Podrían mover de lugar ese carro que han dejado mal estacionado?” “¿Podrían decirles a las mujeres que sostienen las mantas que se aparten para dejar pasar a una ambulancia?”.

En El Salvador, se suele asociar la organización y la participación política únicamente a los hom-

bres. Pero las mujeres fueron parte de todos estos movimientos. Las que participaron en el movimiento antiimperialista; las sufragistas de la década de 1930, lideradas por Prudencia Ayala; las que colaboraron con el levantamiento campesino de 1932; las que formaron parte de la guerrilla y las que integraron los movimientos sindicales de la década de 1990.

Así ocurre con la organización sindical de la que forma parte Conchi. Los sindicatos son agrupaciones de tradición de izquierdas. Su objetivo es señalar los abusos que cometen las empresas: denuncian a los patronos que incumplen sus derechos laborales y al Estado por no defenderlos.

Las mujeres que pertenecen a estos movimientos —cuyas figuras históricas de referencia y líderes suelen ser hombres— deben resistir también frente a la violencia que se ejerce contra ellas por ser mujeres. La primera, en el “espacio privado”: si no son madres, esposas ni se encargan de tareas domésticas, su rol social como mujer puede considerarse como fallido. Conchi no ha estado exenta de esta situación. En toda su vida, solamente ha tenido una pareja, a los 44 años. Nunca llegó a vivir en la misma casa, y tampoco logró quedar embarazada a pesar de que lo intentó.

— ¿De 44 años se acompañó?

— No, él en su casa y yo en la mía —responde en un tono tajante. Tiene claro que conservar su propio espacio habitacional nunca fue negociable.

— ¿Nunca le ha gustado eso?

—No. Intentamos acompañarnos, pero no me gustó eso de que me estén mandando. Eso de que “mirá, que no vas a salir para otra parte”.

Lo primero que me dijo fue: “Si te venís para la casa, no vas a ir a la iglesia, no vas a ir al sindicato”. Y ahí sí no. —Cuando responde esto, cierra un poco los ojos y niega con la cabeza. Como si recordar esto la irritara, pero reconoce que era lo que tenía que hacer.

Conchi nació en un pueblo de San Vicente, un departamento al oriente de la capital. Creció en el campo. Tuvo que suspender su educación básica por el conflicto armado y solo llegó a cursar hasta sexto grado.

—La escuela la cerraron porque la guerrilla llegaba seguido —recuerda—. Nos sacaban de los salones, nos formaban y nos comenzaban a dar propaganda para que la leyéramos en frente de ellos. También sacaban los libros que estaban en los estantes y los quemaban en frente de nosotros.

Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2019, las mujeres en el rango de edad al que pertenece Conchi tienen un promedio de siete años de escolaridad. Esta generación es la que vivió sus veintes en medio del conflicto armado.

Muchas personas como ella, originarias del área rural, tuvieron que migrar hacia San Salvador para huir de la guerra, de la pobreza, o de ambas.

En la ciudad, en los ochenta, las oportunidades laborales para las personas que no habían completado el nivel de educación media se limitaban a los oficios como la albañilería o la carpintería —para los hombres—, y el trabajo del hogar o la costura para las mujeres.

A los 21, Conchi aprendió corte y confección en un taller ubicado en la 25 avenida norte, una calle con importante actividad comercial. Ahí se ubica el Hospital Nacional Rosales, uno de los más importantes de la red de salud pública del país. El trabajo consistía en pequeños encargos de costura: arreglar trajes, coser vestidos, hacer ruedos a las mangas de pantalones y camisas, confeccionar uniformes escolares.

En el taller aprendió a utilizar una máquina de pedal. Se dedicó a hacer vestidos, por los que le pagaban cinco colones —84 centavos de dólar para la época—. Para poder ganar un poco más que eso, Conchi se quedaba después del turno con otras compañeras y terminaba hasta tres vestidos. Con eso, juntaba 15 colones —2.5 dólares—. Cuando la oscuridad ya no les dejaba coser, se llevaban el trabajo a sus casas, y ahí terminaban de arreglar detalles. Trabajó ahí cinco meses.

El plan de Conchi era aprender el oficio y conseguir un empleo asalariado con prestaciones de ley. La ilusionaba la posibilidad de conseguir una pensión. Escuchaba decir a la gente que, por trabajar algunos años, al jubilarse recibían una cuota mensual de ahorros. Por eso entró a la maquila.

Pero, serían las mismas maquilas las que sabotearían el pago de su pensión: ahora quiere jubilarse, pero debido a las irregularidades que han cometido sus empleadores a lo largo de los años, no ha podido. Dejaron de pagarles AFP y Seguro Social sin avisarles.

En 1991, con 26 años, entró en una empresa especializada en la decoración de telas. Ella tenía que bordar a máquina figuras de animales, sobre retazos de tela.

Ahí consiguió esas prestaciones de ley que tanto buscaba: seguridad social y fondo de pensión.

Durante tres meses, la eficiencia de Conchi ganó la confianza de sus supervisoras. Si le encomendaban confeccionar hasta 25 piezas, ella lo hacía.

Las irregularidades que caracterizan a las maquilas no tardaron en aparecer. Según un estudio de 2015 publicado por la Universidad de El Salvador, es común que las maquilas abandonen El Salvador y no paguen a sus empleadas el pasivo laboral que corresponde.

Con el pretexto de que la maquila debía trasladarse a otra parte de la ciudad, les dijeron a las empleadas que podían irse por una semana a descansar a sus casas. En esa semana, la empresa cerró y no volvió a contactar a las empleadas. Tampoco las indemnizaron por el tiempo que trabajaron. Ahí comenzaron a protestar.

Da la impresión de que a Conchi la organización política se le da de forma espontánea. Desde la primera vez que trabajó en una maquila, decidió enfrentarse a sus empleadores.

Tuvo que aprender a luchar de forma autodidacta.

Cuando su hermana estudiaba bachillerato, Conchi le pedía prestadas las copias del Código de Trabajo y de la Constitución y estudiaba algunos artículos. Esto le sirvió cuando debió enfrentarse a la supervisora de la maquila donde trabajaba. La mujer no tuvo cómo defenderse cuando Conchi corrigió un artículo que ella, la

supervisora, creía conocer bien. No esperaba que una trabajadora conociera sus derechos.

La experiencia en esa primera maquila hizo que Conchi intuyera lo que estaba a punto de pasar en Florenzi S.A. de C.V.. La maquila iba a cerrar. Se lo confirmó el hecho de que le negaran pasar a la consulta que tenía programada con el coloproctólogo en el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social. La empresa había dejado de pagar su cotización mensual desde diciembre.

Cada vez que explica la motivación de su lucha, Conchi da la misma respuesta: no puede actuar de otra forma frente a las injusticias. Pareciera que su ánimo de lucha es producto de la herencia de la cultura política de la segunda mitad del siglo XX en El Salvador. Pero ella desafía esta correlación. No tiene familiares guerrilleros, ni militares. Su actitud frente a los conflictos y las injusticias viene de sus convicciones morales y de un gran sentido de curiosidad. Se unió al sindicato porque aprendió que la única forma de negociar y exigir a las empresas en este país era organizándose.

En los días que Conchi trataba sus síntomas del COVID-19, se enteró del rumor de que algunas mujeres habían llegado a trabajar a Florenzi a pesar de las prohibiciones del gobierno. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, había decretado una cuarentena obligatoria que incluía el cese de toda actividad económica. A pesar de que no pudo comprobarlo, le causó desconfianza: ¿por qué a ellas las habían llamado para ir a trabajar y a las otras no? Hasta hoy, Conchi no lo sabe.

—¿Y usted siente que descansa, Conchi?
—Fíjese que sí —contesta—.

—¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cómo descansa?

—Aquí estoy. Llevo el listado de las personas que dan el dólar para pagarle a la compañera que recibe las notificaciones. En eso paso. O a veces, si hay espacio, ayudo con la cocina.

—¿No hace actividades para relajarse aparte de cosas que tengan que ver con la organización de ahí?

—No, no hago nada más.

La protesta absorbe su rutina, sus pensamientos y también la forma como se siente. Preferiría regresar a su situación anterior, cuando trabajaba en la maquila, aunque está agradecida con todo lo que le ha tocado hacer.

Las mujeres buscan la forma de entretenerse. Ven películas en proyectores prestados. Conversan. Los viernes, asisten a talleres sobre educación sexual con enfoque de género, facilitados por la Organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa.

Son principalmente Conchi y otra de sus compañeras, Nery Ramírez, quienes toman la palabra cuando deben de hablar por el grupo. Conchi tiene una voz potente que proyecta con fuerza. Habla con seguridad, tiene certeza de cómo fueron los hechos. Si no tiene clara una fecha o una evidencia fotográfica del caso, la busca o pregunta a sus demás compañeras.

Por la noche, cuando está de turno en la maquila, lleva a cabo su "rutina nocturna": con tranquilidad recoge su colchoneta, la acomoda en la tarima y duerme.

El primer día que les tocó pasar ahí la noche, solo aventó un trozo de cartón en el piso, se cubrió con una colcha y se quedó dormida. Amaneció con dolor en la cabeza por lo duro del suelo, pero se lamenta como si se tratase de cualquier contingencia, como del clima. No culpa a nadie. Tampoco se queja de no dormir si en su noche de turno llueve mucho y la estancia se inunda. Conchi no se queja. Hace.

El refugio a distancia de las mujeres rotas



Ilustración: Yavheni de León

Por: Carmen Quintela • Agencia Ocote

Son mujeres que acompañan, que cuidan, que sanan a otras mujeres sobrevivientes de violencia. Y lo hacen con las manos atadas. Llevan 11 meses sin cobrar su sueldo, porque el gobierno no les ha pagado. La pandemia las obligó a reinventar la manera en la que ayudan a otras mujeres, en un momento en el que las caricias y los abrazos se convirtieron en lo más necesario, pero lo más prohibido.

En los pasillos de la casa, el silencio es tan profundo que te atraviesa.

Afuera llueve. El agua golpea continua, con fuerza, los tejados, el patio, el techo de los vehículos estacionados. De vez en cuando llega de la calle una bocina ahogada, una moto sin silenciador, el chirrido de unas llantas al frenar.

Pero dentro, dentro de esta casa inmensa, laberíntica, con escaleras que suben y que bajan, con puertas cerradas, cuartos abiertos y alguna luz encendida, el silencio, otro tipo de silencio, es tan profundo que te atraviesa.

En la casa trabajan mujeres. Mujeres que defienden, que acompañan, que cuidan. Que sanan a otras mujeres que se sienten rotas. La casa tiene un nombre. Centro de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, se llama. Caimu, para abreviar.

Los Caimus son espacios que organizaciones de mujeres gestionan y que reciben (que deberían recibir) fondos del gobierno. Hay siete en toda Guatemala y este es uno de los cuatro administrados por el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM). Está en Ciudad de Guatemala.

El espacio es grande. No llegas a ver cómo de grande, pero lo es. Tres niveles. Cuatro, cinco, seis salones por cada uno, algunos grandes, otros chiquitos. Hay puertas que no se intuye qué guardan y gradas que serpentean por las paredes hacia saber dónde.

Al mirarla desde la calle, se puede adivinar que la construyeron de a poquitos, piso a piso. Un primer nivel de block, un segundo de ladrillo y un tercero con paredes de lámina atravesadas por unos grandes ventanales.

Al entrar, la sensación se confirma. Aquí dividieron este cuarto con un muro de tablayeso. En este pasillo levantaron una pared con listones de madera, para hacer una oficina. Este acceso lo cercaron con una pequeña puerta improvisada. La casa parece estar viva. Cambia según vaya haciendo falta para esto o para esto otro.

Lo único que se mantiene en cada espacio es el color de las paredes. Mitad amarillo, mitad marrón, para imitar un zócalo que en algunos cuartos es real, de madera oscura y los mismos relieves de las puertas originales, anchas, pesadas, macizas.

Cada salón tiene lo mínimo, lo imprescindible. Un par de sillas por mesa, algunas computadoras, impresoras, un paquete de pañuelos desechables. Lo que más hay, eso sí, son muebles archivadores, donde se apretujan cientos, miles de expedientes.

Antes, la casa solía estar llena. Mujeres en terapia de grupo, en sesiones individuales. En reunión con abogadas. Mujeres que esperaban que las escucharan por primera vez, para empezar sus procesos.

Y niños. Niños bajo las faldas de sus mamás, deseosos de apilar bloques de plástico de colores, de jugar con peluches y de hacer que los muñecos cobraran vida. Las acompañaban, en ocasiones, para contarle a una psicóloga cómo se ve la violencia a medio metro de altura del piso. En otras, porque sus mamás no tenían con quién dejarlos en casa.

Después llegó la pandemia. Llegó para cambiarlo todo. Lo paró por un instante y luego tocó arrancar de nuevo.

Cuando se habló de que la COVID-19 había entrado a Guatemala, de que se ordenaba un toque de queda y se prohibían reuniones presenciales, las mujeres dejaron de llegar a la casa. Todavía no sabían muy bien cómo, pero seguirían el trabajo cada una desde sus hogares.

Luego cerraron los juzgados y todo se detuvo. Los procesos que las mujeres tenían abiertos se estancaron. A las que buscaban ayuda por primera vez en el centro, les pidieron paciencia. Seguirían escuchándolas, a distancia, pero debían esperar. Muchas siguen haciéndolo.

Heydi Coyote es la trabajadora social del Caimu. Es la persona que recibe a las mujeres cuando llegan al centro. La primera que escucha sus

historias. Ahora lo hace por teléfono. A veces, por mensajes de Whatsapp. “¿Están atendiendo?”, le preguntan cada día unas diez veces.

La mayoría de las mujeres que llegan al Caimu son referidas por instituciones del Estado, como juzgados, centros de salud o fiscalías. Pero aquí no siempre pueden atenderlas inmediatamente.

Frente a su computadora, Heydi cuenta que manejan una lista de espera de unas 350 mujeres. Cuando abre la base de datos para verificar esta cifra, las filas con sus nombres son muchas más. “No, perdón. Serán unas 500... No. Más”. En la pantalla hay 700 líneas y todavía no llegó al final del documento.



*Ilustración:
Maritza Ponciano*

Esta lista de espera es para empezar un proceso desde cero. Para que puedan escuchar sus historias y abrirles un expediente en el centro. Hay quienes llamaron hace meses para pedir apoyo y hasta hoy no les han podido devolver la llamada.

La mayoría de las mujeres que contactan al Caimu necesitan salir de la relación en la que

están. Necesitan esa respuesta urgente. Y cuando Heydi se comunica ahora con ellas, tiempo después de esa primera llamada o de ese primer mensaje de auxilio, algunas ya no quieren recibir apoyo.

“Yo me he estado frustrando mucho, siento impotencia”. A Heydi se le nota esa desilusión en los ojos, por encima de una mascarilla qui-

rúrgica que le cubre la mitad del rostro. “Las llamamos y muchas dicen: ‘Yo lo necesitaba entonces, ahora no. Ya volví con él’. Cuando escucha estas palabras, a Heydi le da una punzada en el estómago.

Las citas en persona se pasaron al Whatsapp, al Zoom y al teléfono. Claro, no es lo mismo. Nunca lo es. ¿Que si cambia la manera de atender a las mujeres? Por supuesto, responde Heydi. Las reacciones, dice. Eso es lo que más se perdió. Tener un vínculo a través de una palabra, de una mirada, que lo empieza todo, que hace que las mujeres se suelten y confíen.

Ese “no estás sola”, que tanto les repiten, no es lo mismo escucharlo cara a cara, mientras les tienden la mano, que a un teléfono de distancia.

Cuando el Organismo Judicial anunció que los juzgados abrirían a finales de agosto, en el Caimu decidieron volver a la casa un par de semanas antes. Tocó sacar el polvo de los expedientes, poner las audiencias en agenda y llamar a las mujeres. Se hicieron turnos. Se dividieron en los salones. Cada una en su espacio. Distancia, mascarilla, gel.

A la entrada, los protocolos básicos de seguridad. El pediluvio, el termómetro, el alcohol en las manos, la ropa y los zapatos. Dentro, empiezan a verse algunos cambios. Levantaron muros en uno de los salones para dividirlo en tres salitas donde apenas caben una mesa y un par de sillas. El olor a pintura fresca delata el apaño que inventaron para poder desinfectar un espacio mientras se usan los demás.

Faltan mamparas, mejores sistemas de ventilación, pantallas y mascarillas para las mujeres que llegan. Saben que necesitan medidas para que el espacio sea seguro. Por eso prefieren,

por ahora, mantener las citas a distancia. No quieren arriesgarse ni arriesgarlas.

Abrieron la puerta a algunas mujeres, que llegan en cuentagotas, si logran pagarse un pasaje de bus o un taxi que las acerque a un precio prohibitivo.

Llegan si su caso es imprescindible conocerlo en persona o si lo necesitan, porque en el que debería ser su hogar no se sienten seguras.

Eso también las obliga a buscar nuevas formas de comunicarse. Algunas de las mujeres que atienden viven con sus agresores. Antes, para muchas, salir de casa para ir al Caimu era relativamente sencillo, hasta una manera de catarsis. Buscaban una excusa, hacían coincidir algún viaje en el que fueran a hacer mandados y se pasaban por el centro.

Ahora, por teléfono, la cosa se complica. Las mujeres buscan momentos en los que sus parejas no están en la casa, o en los que pueden llamar sin que ellos se den cuenta.

Heydi tuvo que aprender a entender las claves. Cuando un “ajá, ajá, ajá” significa “ahora no puedo hablar, mi esposo está escuchando”. Y un “no, gracias, seño” es “llámeme mejor en la mañana que él sale a trabajar”.

Wendy Tobar es la abogada encargada del área legal del Caimu. Es difícil seguirle el ritmo. No para.

En su despacho, rodeada de carpetas nutridas por cientos de folios, empieza el baile de cada día. Primero, revisar notificaciones. Algunas mañanas, como la de hoy, son apenas dos. Otras pueden ser 20. Luego, actualizar

los expedientes. “Mi trabajo es desentramar procesos”, dice sin dejar de escribir, como si pudiera dividir en dos el cerebro.

Suena su celular. “Sí, mirá pues, el problema es que hubo un error en la sentencia y se está resolviendo por esta vía...”. Cuelga. Suena de nuevo. “¿Cómo te fue? Mirá, ella no tiene que aceptar ninguna pensión que no le conveniga”. Teléfono fijo. Un dispositivo en cada oreja. “Ahora sí estoy contigo, decime”. Una colega le pide la firma de un documento. “Mirá, aquí falta esto, esta palabra no está bien, mejor vuelve a imprimir”. “Te escucho, te escucho”. Cuelga. Llega un mensaje. Cierra expediente, abre otro. Otra firma. El celular.

Celebra que su hijo le enseñó a usar el Whatsapp en la computadora. En el Caimu les salvó la vida. Cuando lo abre, empiezan a caer mensajes. “Estos ya los contesté anoche, así que hoy no hay tantos”. De reojo se ven unos cinco. ¿Hasta qué hora responde? No lo sabe. Hasta cualquiera, de madrugada incluso, “mientras esté en mis cabales”.

Wendy hace un chasquido con la lengua cuando abre el primer mensaje. “Ay, hijuelagran...”, se le escapa. Teclea con rapidez para contestar. La mujer con la que habla les contactó hace un par de días, por la noche. Al día siguiente tenía una audiencia. Su pareja la había demandado y le quería quitar la custodia de sus hijos.

Después de dos horas al teléfono y de resolver todas sus dudas, Wendy le recomendó llegar a la audiencia, no excusarse, aunque fuera sin abogada. Media hora después, la mujer la volvió a llamar. Un amigo le había dado otro consejo (“siemmpre pasa lo mismo”, dice la abogada, resignada), que no fuera, que dijera que estaba enferma.

Ella le hizo caso a él, pero no salió como se esperaba. El juzgado rechazó su excusa. Desesperada y sin saber qué hacer, de nuevo, contactó con el Caimu. Wendy vuelve a suspirar y termina de contestarle.

Lo del Whatsapp y la atención remota viene de antes de la pandemia, del año pasado. Después de mucho pedirlo, Wendy consiguió que les autorizaran un teléfono, cuando se vieron desbordadas por los casos que llevaban las cuatro abogadas del área legal. Crearon un grupo con más de 50 mujeres que llevaban procesos de negación de asistencia económica. Por ahí las convocaron a una reunión.

Les dijeron que no las podrían acompañar físicamente a los juzgados, pero sí les podrían asesorar por teléfono. Las mujeres aceptaron. Empezaron a escribir todos los días. “Mire, recuérdeme a dónde es que tengo que ir”. “¿Cuál es el documento que tengo que pedir?”. “¿Cuál es mi número de expediente?”. Cada una tuvo que empaparse y conocer sus casos con precisión. Cada una se convirtió en experta de sus procesos legales.

La estrategia la reutilizaron para la pandemia. “Usted deje su mensaje y en un ratito que tengamos le respondemos”, les dijeron a las mujeres que llamaban. A las abogadas les toma tiempo escuchar los audios y revisar los archivos que les envían, pero ahora ya no pueden acompañarlas a ninguna a las audiencias, ni a presentar documentos, ni a argumentar en una conciliación.

El piloto del Caimu encargado de los traslados es diabético e hipertenso. Una de las abogadas está en edad de riesgo. Así que acompañan a las mujeres distancia, les escriben en mensajes lo que tienen que pedir y cómo tienen que hacerlo. Y ahí van.

En el sofá del salón de psicología de niñas y niños, Mildred Valdez sujeta su celular con la mano derecha, sobre la pierna cruzada, mientras trata de mantener una postura erguida. Frente a ella, una montaña de juguetes que llevan meses sin ser jugados.

Está en medio de una sesión grupal, con otras cinco mujeres. Un espacio para que cada una cuente cómo ha pasado la semana, qué cambios ha notado. Mildred las guía, pero entre ellas se animan, se dan aliento, se entienden. “Qué bueno escuchar que está bien”, le dice una a otra. Las voces suenan metálicas a ratos, entrecortadas, algún ruido de fondo, sonido de niños que reclaman atención o un perro que se asusta al escuchar un portazo.

Mildred les pide buscar un lugar tranquilo donde relajarse, y las invita a meditar juntas. Ojos cerrados, respiración lenta, imaginen una luz a la altura del corazón, que va hacia los pies y se convierte en raíces, que avanzan hacia la tierra. “Este es mi lugar seguro, aquí no entra nadie que yo no quiera”, repiten todas casi al unísono. Algún audio llega desfasado, como un eco, pero no importa. En la distancia, que se hace más corta, las mujeres encuentran ese espacio de paz.

Mildred lleva ahora mismo la terapia de unas 170 mujeres. Ciento setenta. Además, las que llegan a terapia grupal. Al día atiende como mínimo a unas ocho mujeres. Antes, cuando no estaba sola en el área de psicología, cuando eran tres las que daban terapia, se repartían entre ellas a unas 250.

Tuvo que ampliar horarios y algunos días empieza a las siete de la mañana a pasar consulta. Además de la lista de espera que maneja Heydi

para una primera atención, Mildred también tiene la suya propia. No tiene el dato de cuántas mujeres tienen que esperar antes de una sesión. Sólo le pide a Heydi que las ponga en agenda donde encuentre un espacio, que generalmente no se abre hasta que una mujer termina su proceso. Quisiera poder atenderlas, pero el día no tiene más horas.

Por qué se fueron las demás es una pregunta clave. Mildred, Heydi, Wendy y las otras nueve mujeres que trabajan en el Caimu llevan 11 meses sin recibir un sueldo. Es el problema de todos los años. Ya casi parecen resignadas a aceptar que la cosa no va a cambiar.

La historia es así. Los siete Caimus de Guatemala reciben fondos del Ministerio de Gobernación desde hace 12 años. Antes, el Grupo Guatemalteco de Mujeres se financiaba con cooperación internacional, pero la Ley contra el Femicidio llegó a cambiar las reglas del juego en 2008.

En uno de sus artículos dice que el Estado de Guatemala está obligado a garantizar los recursos de los Caimus. Con los años, los montos han ido cambiando. Se empezó con ocho millones de quetzales, luego con nueve y medio y después, cuando otras organizaciones crearon otros centros, se llegó a los 20 millones de quetzales (más de dos millones y medio de dólares).

Solo para los cuatro Caimus del Grupo Guatemalteco de Mujeres, se mantuvo esa partida fija de 9 millones y medio de quetzales (algo más de un millón 200 mil dólares). Esto, sobre el papel. El problema es que, para liberar los fondos, el Ministerio de Gobernación debe firmar un convenio que siempre tarda meses en formalizar.

Todos los años, el gobierno alega demoras en procesos internos para justificar la tardanza. Desde los Caimus lo ven más bien como una estrategia para debilitar a las organizaciones que apoyan a las sobrevivientes de violencia.

El año pasado, por ejemplo, recibieron los fondos el 29 de diciembre. Tuvieron tres días para ejecutarlos. Para pagar salarios y servicios pendientes, antes de que terminara el mes. No hacerlo a tiempo implica que, cuando se les vuelva a asignar la partida en el presupuesto anual, el Estado argumente que no necesitan tanto dinero: cómo van a necesitarlo si no se gastaron el del año anterior. De hecho, para el presupuesto aprobado para 2021, la partida para los cuatro centros Caimus se redujo a poco más de dos millones de quetzales.

Este año todo apunta que no será diferente. A finales de noviembre todavía no tienen certeza ni siquiera de si recibirán el dinero o no.

Las mujeres están trabajando gratis. Dedican todas las horas posibles del día a defender, acompañar, cuidar y sanar a otras mujeres sin recibir un salario. Es una carga que pesa.

Mildred tiene que decirles a las mujeres que llegan a terapia que “todo va a estar bien”, que “vamos a ver cómo solucionamos su caso”, cuando a veces ella está en la misma situación: “Yo no me puedo exponer ante la gente, pero personalmente cuesta un montón. Ya son 11 meses y mes a mes tienes que ver cómo le haces”. Lleva tres años en el Caimu. Tres años de no recibir su sueldo de todo el año hasta diciembre.

Las mujeres se apoyan en sus familias. A Heydi, por ejemplo, la ayudan sus hermanos, sus padres y sus amigos. “Al final, cada una ve cómo sale de la situación”. Medio con sarcasmo, me-

dio no, dice que ellas también son sobrevivientes de violencia.

Algunas, con mucho dolor, se bajan del barco. Las demás no les pueden reclamar nada. Por mucha vocación que sientan y muchas ganas de ayudar a las mujeres que tengan, también tienen que comer.

La pregunta parece evidente: ¿Por qué no buscan alternativas? Otros donantes, cooperación internacional, proyectos de fundaciones.

Wendy lo ve como un pulso. Un pulso constante, lento, doloroso. De un lado, los centros de apoyo a mujeres. Del otro, el gobierno. Y en este pulso, el antebrazo de las organizaciones de mujeres está a punto de tocar la mesa. Rendirse, dejarlo caer, soltar la mano entumecida, supone perder unos derechos que costó mucho ganar.

“Si nosotras nos hacemos a un lado, si nos quitamos de los espacios ganados, alguien más los va a ocupar y no lo van a hacer en beneficio de las mujeres”, reflexiona Wendy. “Es tremendo, pero ni modo, ¿verdad?”.

La abogada se encoge de hombros y vuelve a sumergirse entre sus documentos. Quiere dejar “la mesa limpia” antes de terminar el año, para empezar el siguiente con el menor número de procesos abiertos. De reojo mira una pila de 14 expedientes de casos de negación de asistencia económica que todavía no le dio tiempo a revisar.

Aunque el silencio de sus pasillos parece decir lo contrario, la casa sigue funcionando. De una o de otra manera, tiene que mantenerse en pie. Como un oasis, con un espacio de sanación. Como un refugio a distancia para las mujeres rotas.

Las guerreras en primera línea



Ilustración: Yavheni de León

Por: Jennifer Avila Reyes • ContraCorriente

La pandemia y dos huracanes se sumaron este año a las batallas permanentes de las enfermeras en Honduras. Ellas han aprendido a resistir y a enfrentarse juntas al virus, a las inundaciones y a los males históricos: el desfaldo en el sistema sanitario, la desigualdad de condiciones laborales, la violencia, el machismo.

Pamela Serrano, Andrea Lazo y Gabriela Caballero regresan de repartir ayudas a sus colegas, ochenta enfermeras que se hospedan en un albergue en San Pedro Sula. Están ahí después de que la tormenta tropical Eta inundara sus casas y prácticamente toda su ciudad en el valle de Sula, al norte de Honduras.

En ese momento, ya se había anunciado la entrada de otro ciclón que anticipaba un nuevo peligro.

La emoción le obstruye la garganta a Pamela, que de vez en vez llora de rabia, de nostalgia y de tristeza. Sus últimas dos semanas han em-

peorado un año ya marcado por la incertidumbre y la muerte. Aun así, ella prefiere decir que éste es «el año de la reconciliación, porque tenemos que entender que nos necesitamos unos a otros».

Las tres mujeres están de luto. Hace unos días asesinaron a Kellin Arnudo, una de sus compañeras, justo enfrente del hospital donde trabajan en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Llora. Cuenta que la muerte de Kellin no importa ni a la sociedad ni a sus autoridades. Tampoco parecen importarles las enfermeras y

*Ilustración:
Maritza Ponciano*



auxiliares que esperan volver a sus casas, anegadas hace unos días, después de la tormenta.

A pesar de su propia tragedia, las ochenta enfermeras que se refugian en el albergue deben regresar a los precarios hospitales hondureños donde la situación por la pandemia de COVID-19 está rebasada ahora por la crisis sanitaria que provocaron dos semanas de inundaciones. El IHSS ha hecho lo que puede, dice Pamela, brindándoles albergues exclusivos y

hasta un salario extra a las afectadas, aunque no es suficiente.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social es, hasta ahora, el caso más dramático e indignante de corrupción. En 2015 el desfalco de 300 millones de dólares a la institución sacó a miles de personas a las calles en un movimiento que ya recorría Centroamérica: los indignados. Pedían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, cuando se demostró que gran par-

te del dinero robado fue a parar a las cuentas de su partido para la campaña política que lo puso en el poder en 2013.

Hernández, sin embargo, se reeligió en 2017, a pesar del escándalo y de estar prohibido en la Constitución. Mientras él se mantenía en el poder, ellas, las enfermeras del IHSS se adaptaron a los malos tiempos. Siguieron su trabajo a pesar de que perdieron algunos derechos como las vacaciones pagadas y la alimentación en el trabajo.

Un año después, se vino otra crisis. El gremio médico y de enfermería salió a las calles ante la amenaza de la privatización de la salud y de la seguridad social. «Todo quedó en protestas», dice hoy Pamela. Protestas que fueron reprimidas con violencia. Ese grito en las calles que exigía mejores salarios, más presupuesto para el sector sanitario y la no privatización del sistema de seguridad social, se terminó de extinguir cuando llegó la pandemia que puso al mundo en pánico. Pamela, Andrea y Gabriela, también temían: debían seguir trabajando en la precariedad, pero ahora enfrentando un enemigo desconocido.

«Fue impactante, teníamos mucho miedo porque no teníamos cómo enfrentarnos a esto. La mayoría de enfermeras, en un inicio comprábamos nuestros propios insumos de bioseguridad», cuenta Pamela. Después de tres meses de pandemia fueron dándoles material. Primero cinco mascarillas al mes, luego ocho y luego diez. A las enfermeras en las áreas COVID les dan quince.

Pamela gana 16 mil lempiras al mes (unos 650 dólares), aunque el salario mínimo para su rubro ronda los 25 mil lempiras (unos mil dólares), después de un acuerdo al que llegaron con el Gobierno en enero de este año. Con ese in-

greso, eran pocas las posibilidades de comprar más insumos de bioseguridad.

«Debido a la falta de responsabilidad de nuestros gobiernos, el personal de salud está mal pagado en cualquier circunstancia, a pesar de que estamos siempre en primera línea, en pandemia, en desastres naturales, si se viniera una guerra, ¿A quienes envían a donde más se necesita? Al personal de los hospitales», agrega Pamela. La enfermera cuenta que, además, la mayor parte de sus compañeras son madres solteras. Al ser el sostén de sus familias, buscan tener más de un ingreso y hacen turnos dobles.

Según la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud, para 2019 Honduras contaba con algo más de dos enfermeras por cada 10 mil habitantes. Eso quiere decir que hay una enfermera disponible para más de 4 mil personas.

El Plan Nacional de Salud para 2021 establece que en las áreas de enfermería de todos los hospitales de la Secretaría de Salud debe haber 886 enfermeras profesionales con educación universitaria. En el IHSS hay apenas 203. Las auxiliares de enfermería representan el grupo más numeroso: 5,834 están contratadas por la Secretaría de Salud y 843 por el IHSS. En muchos casos, la misma persona trabaja en ambas instituciones.

Las auxiliares, la mayoría mujeres, son las que dan atención primaria en centros de salud urbanos y rurales. Además, recolectan datos para el sistema de información estadística de la Secretaría de Salud.

Pamela sabe que son indispensables. Por eso, cuando comenzó la pandemia, a pesar de que estaba de vacaciones y se recuperaba de un

cáncer de mama, dijo que sí al llamado a servicio.

Las mujeres en su casa se pusieron manos a la obra, con protocolos propios para evitar el contagio. Su hermana y su hija preparaban aguas de eucalipto para bañarse y agua con cloro para que Pamela dejara los zapatos. El patio se convirtió en zona de desinfección. Aun así, la enfermedad llegó. Todas se contagiaron: su madre que padece hemiplejia, su hermana embarazada de siete meses y su hija. «Gracias a Dios sobrevivimos y pudimos tener una experiencia diferente. Nos cuidamos mutuamente», narra Pamela.

La institución, poco a poco, mejoró las medidas de bioseguridad para el personal de enfermería. Pero en la comunidad, los vecinos de Pamela empezaron a discriminarla. Le tiraban agua con cloro cuando llegaba, le pedían que no se acercara a nadie. Meses después de pasar por la enfermedad, sus vecinos aún no le dirigen la palabra. «Nosotras no nos queríamos enfermar», dice.

A su lado está Andrea. La COVID-19 también la atravesó a ella, a sus padres, a su hermano y a sus dos hijos de siete y 11 años. La enfermedad fue otra batalla ganada de las muchas que ha vivido.

«A mí nunca me pegaron, pero mi expareja sí ejerció violencia psicológica conmigo. A pesar de eso, yo aguanté siete años para que mis hijos no perdieran la figura paterna. Pero al final no se pudo, y me separé. Yo sé que muchas de mis compañeras no salen de esa situación por miedo a quedarse solas» cuenta Andrea.

Andrea trabaja en una clínica periférica del IHSS en Choloma, Cortés. Para llegar a su trabajo, toma un camino de media hora todos los días.

Después de sus turnos de hasta 12 horas, en casa le esperan sus padres y sus hijos a quienes también debe cuidar.

Cuando enfermaron en su familia, ella cuidó de todos. Eran jornadas largas. Se levantaba a las seis de la mañana y se lograba dormir a medianoche. Su padre era quien más cuidado requería. Le administraba medicamentos por vía intravenosa cada tres horas, le medía la saturación de oxígeno y lo colocaba en posición prono: debía estar acostado boca abajo para ayudar a expandir sus pulmones.

Incluso ahora, después de que el virus pasó, sigue cuidando. Como secuela de la COVID-19 su padre padece arritmia cardíaca y su madre sufre constantes dolores de espalda. Y Andrea, muchas veces, se ha sentido sola en ese rol de cuidadora. Sola y también discriminada.

Con la pandemia, el Gobierno hondureño decretó un estado de excepción que todavía se mantiene. En los primeros meses, la policía detuvo a más de 60 mil personas que violaron el toque de queda. Muchas comunidades se cerraron y crearon reglas discriminatorias: tratar como agentes de infección al personal de salud, restringirles el acceso a espacios comunitarios y expulsar a personas infectadas con COVID-19 de sus barrios. La Red Lésbica Cattrachas llamó a esto «covidfobia». Muchas personas del personal sanitario la vivieron.

Una mañana Andrea fue al banco a hacer un trámite. Según su número de identidad, no era el día que tenía permitido circular, pero el que sí le tocaba no había podido salir, estaba de turno. Presentó su carnet de personal sanitario para que la atendieran. Pensó que esto le daría algún privilegio. No fue así. El guardia de seguridad la empujó con el tolete. «Me dijo que tenía que estar a dos metros de distancia,

que me alejara de él». Andrea vivió esto en la calle, pero también en su familia. Cuando enfermó, incluso la pareja de una prima suya le prohibió ir a visitarla. «Yo lloré, me dolió tanto que estuve sola en todo esto», relata Andrea.

El distanciamiento

La pandemia cambió las rutinas en los hospitales. Las enfermeras tuvieron que aprender a vestirse y desvestirse con el equipo contaminado a pesar de no tener un cuarto propio donde hacerlo. Lavarse las manos, colocarse el primer par de guantes, las botas, desinfectar los guantes con alcohol gel, ponerse el overol, luego la mascarilla N95 y luego la quirúrgica, las gafas, la careta, la bata y, por último, un segundo par de guantes cubriendo el puño de la manga de la bata. Las enfermeras aseguran que los médicos tienen sus habitaciones para descansar, pero ellas no tienen siquiera un sitio para hacer todo este ritual de vestuario.

El agobio de llevar un traje asfixiante durante ocho horas no es lo más trágico para Andrea. Estos meses, ella y sus compañeras llegaron a llorar por la impotencia de no poder tocarse, abrazarse, compartir comida, platicar a la hora del almuerzo. El aliento que les daba la cercanía ahora estaba prohibido. El distanciamiento físico las rompía.

«Comíamos separadas en cubículos cuando estábamos acostumbrados a comer en equipo, lloramos porque nos mirábamos de lejos, no aguantábamos», explica Andrea.

El apoyo mutuo es muy importante. Con la pandemia han requerido más fuerzas. Es doloroso ver que los pacientes no pueden respirar, es doloroso verlos morir.

Gabriela escucha atenta a sus colegas. Andrea y Pamela llevan más experiencia que ella en el oficio. Pide turno para contar su historia. Apenas lleva dos años trabajando en el IHSS y cuando la pandemia llegó fue asignada a la sala de atención para pacientes hospitalizados por COVID-19.

«Mi mami es una persona muy ordenada y ella fue mucho apoyo durante esta pandemia» cuenta Gabriela, quien también vive solo con mujeres: su madre y su hermana.

Cuando llegaba a casa luego de su servicio en el hospital, había todo un protocolo: fumigar los zapatos con agua y cloro, dejar la ropa y zapatos en la pila del patio trasero de la casa y correr desnuda hasta llegar al baño. Pero cuando le dijeron que iba asignada a la sala de hospitalizaciones por COVID-19, Gabriela entró en shock.

«Estando ya allí iba con buena actitud, me enseñaron a ponerme los trajes, pero ya estando adentro como a las cuatro horas me dio un ataque de pánico, no podía respirar, me puse a llorar, llamé a una amiga y ella me dijo que me calmara que estuviera tranquila y en fin esa misma noche decidí que iba a renunciar», recuerda Gabriela.

Pero no renunció. Lloró toda la noche y al día siguiente decidió que ese era su trabajo, que debía seguir.

A las enfermeras les toca cuidar del paciente todo el día, comunicarse con los familiares que ya no pueden entrar a los hospitales, ver de cerca a la muerte. También les toca admirar la esperanza de los pacientes. «Las enfermeras somos el corazón de un hospital y hemos visto cómo los mismos pacientes reconocen nuestro trabajo», dice orgullosa.

Hasta agosto de 2020, en Honduras se reportaron 25 enfermeras fallecidas por COVID-19 y actualmente ya se reportan 7 casos de reinfección. A Gabriela, Andrea y Pamela les sorprende que no hayan sido más. Sus rutinas son agotadoras. Pueden pasar las ocho horas de un turno sin tomar agua, con tal de no ir al baño. No pueden quitarse el traje especial hasta terminar la jornada. Algunas doblan turnos para lograr un salario que les alcance para sostener a sus familias.

La violencia y las inundaciones

A Kellin Arnudo la mataron frente a la puerta del hospital, justo antes de empezar su turno.

Era el 11 de noviembre, cuando las colonias de la periferia de San Pedro Sula estaban inundadas por el huracán y los hospitales se saturaron.

Kellin era enfermera del IHSS de San Pedro Sula. Compañera de Pamela, Andrea y Gabriela. Reportes de la prensa hondureña indicaron que esa noche, la enfermera se disponía a entrar a su turno nocturno en el IHSS después de terminar su trabajo en el Mario Catarino Rivas, el principal hospital público de San Pedro Sula. Las noticias dijeron que fue un asalto. Hasta ahora no se sabe bien qué pasó y aunque de inmediato tuvo atención médica, Kellin falleció en el hospital donde tantas veces atendió a personas que llegaban con todo tipo de emergencias.

«Estamos de luto, y hablo por todo el gremio. Esta situación nos puso las barbas en remojo para pedirle a las autoridades más seguridad para nuestro personal», dice Andrea.

Pamela asocia la muerte de Kellin con la violencia contra las mujeres en un país con unas cifras de horror. El Centro de Derechos de Mu-

jes de Honduras (CDM) registró del 1 de enero al 16 de noviembre del 2020, 240 muertes violentas de mujeres. La organización se basa en reportes en medios de comunicación. Las restricciones por la pandemia no hicieron que descendiera la violencia. Tampoco lo hizo la emergencia por las inundaciones.

«Como gremio rechazamos la violencia contra nosotras, las mujeres. Nos sentimos devastadas completamente, y nosotras (las enfermeras) somos las que estamos con los pacientes veinticuatro siete. Es preocupante porque con todo lo que acontece en nuestro país va a haber una alta criminalidad, aumentarán los asaltos», lamenta Pamela. La enfermera recuerda que ellas enfrentan la crisis y el aumento de pacientes en los hospitales por la COVID-19, pero también por otras enfermedades como diabetes, hongos, diarreas o leptospirosis. «Quienes llegan a nuestros lugares y quienes atendemos a todos somos nosotras», explica.

Días después de la entrevista, Pamela envía un video en el que se ve a una mujer que sale de su casa, con un bolso en el hombro y el agua a las rodillas. Es una enfermera, colega suya, camino al trabajo en medio del desastre que se ha convertido su barrio y todo el valle de Sula. Con el paso de la tormenta Iota, apenas una semana después de que Eta dejara devastado todo a su paso, 95 enfermeras del IHSS fueron afectadas.

«Es doloroso ver a nuestras compañeras que siempre andaban así como ando yo en este momento y ahora verlas tristes y apagadas». Pamela señala su cabellera bien peinada y su rostro maquillado, intacto a pesar de la mañana que pasaron en visitas de albergues. «Es triste que le digan a una que no saben si podrán seguir adelante», lamenta.

Las tres enfermeras enviaron cartas a varias empresas. Les solicitaron apoyo para sus compañeras, pero todavía no reciben respuesta. Después de las dos tormentas, los albergues en San Pedro Sula no se dieron abasto. La atención del Estado fue tardía y pobre y las empresas que al inicio se volcaron con el apoyo, terminaron siendo insuficientes porque la situación empeoró.

«Todas sus cosas están llenas de lodo y lo más duro que nos dicen es que sus niños les preguntan dónde van a dormir. Nosotras no podemos hacer mucho. Hemos solicitado a tantos lugares y solo nos dicen que no pueden. Necesitamos el apoyo para restaurarlas a ellas, ellas son las que están allí siempre en el hospital» dice, llorando.

Cuando Eta e Iota llegaron a Honduras, el Congreso Nacional sesionó para aprobar cambios en los presupuestos y legislaciones para atender la emergencia. Entre los proyectos de ley estaba la creación de la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible (Fondes). Sería una empresa creada con el capital de las aportaciones de instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Bancos, aseguradoras, administradoras de fondos de pensiones y cesantías y los institutos de previsión formarían parte de estas instituciones. El proyecto no ha sido aprobado y se ha modificado la parte en la que se tocan fondos de los institutos de previsión, ante las múltiples protestas de los gremios afectados.

Pamela cree que esto, en lugar de aliviar la crisis y asistir a las personas afectadas, es un ataque a todas las trabajadoras, especialmente las del sistema sanitario. Lo único que les queda cuando se jubilan son esas pensiones, insuficientes en muchos casos.

«Esperamos que el Gobierno sea consciente y responsable y que antes de pensar en destruir todo lo que hemos conseguido los trabajadores de salud que recuerde que quienes hemos estado de pie en la pandemia somos los laboratoristas, médicos, microbiólogos, patólogos, enfermeras y personal de aseo», afirma.

Cuando la pandemia llegó a Honduras, a muchas enfermeras les dijeron en sus casas que dejaran el trabajo, que no corrieran el riesgo de muerte. Pamela dice que quizá no hay enfermera que no haya discutido con su familia sobre la importancia de su servicio a pesar del terror que produce la emergencia sanitaria.

Quizá para ellas ese riesgo es asumido desde siempre. Viven en Honduras, un país con altas tasas de violencia y con un sistema sanitario precario.

«Si nos sentimos asfixiadas, ahogadas, lo soportamos y lo aguantamos, porque además somos la fortaleza de las compañeras que están al lado. Estamos siempre diciéndonos si yo puedo tú puedes, eso nos ha mantenido vivas y unidas», reflexiona Pamela.

De eso se trata la resistencia.

****Este es un proyecto coordinado y apoyado por el Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G) en alianza estratégica con Agencia Ocote (Guatemala) -como coordinadora editorial-, ContraCorriente (Honduras) y Alharaca (El Salvador). La publicación de las tres crónicas se realiza entre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre y durante los 16 días de activismo contra la violencia de género. Este proyecto cuenta además con el apoyo de los Centros Culturales de España en Tegucigalpa, Honduras y en El Salvador.***



Cooperación
Española

